



Guadalajara de Buga, agosto 2021

Señor  
**JUEZ PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO BUGA**  
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca

**REFERENCIA:** SUBSANACIÓN DEMANDA

**RADICADO:** 2021-00066

PROCESO LABORAL ORDINARIO RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTE.

**HECTOR ERNESTO BUENO RINCON**, mayor de edad, con residencia y domicilio en la ciudad de Armenia, Quindío, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.736.615 de la ciudad de Armenia, Quindío, Abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 149.085 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.583.176 de Bogotá, Cundinamarca, con residencia y domicilio en el Municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, a usted señor Juez con todo respeto me permito presentar **SUBSANACIÓN DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**, que formulo de conformidad con los siguientes,



**ALJ ABOGADOS**  
Asesorías Legales y Jurídicas

#### **HECHOS**

**PRIMERO:** Mi prohijado nació el 03 de diciembre de 1971, en la ciudad de Bogotá D.C.

**SEGUNDO:** Mi prohijado conformó una comunidad de vida compartiendo techo, lecho y mesa con la señora **LILIANA ELIZABETH GARCÍA MORENO**, quien se identificaba con cedula de ciudadanía No. 52.259.756 desde el 05 de enero de 1998 al 24 de mayo de 2004.

**TERCERO:** Mi prohijado y la señora **LILIANA ELIZABETH GARCÍA MORENO** el 28 de septiembre de 2002 contrajeron matrimonio católico en la Parroquia San Alfonso María de Ligorio de la ciudad de Bogotá hasta el día 24 de mayo del 2004 fecha en la que falleció.

**CUARTO:** Desafortunadamente **LILIANA ELIZABETH GARCÍA** compañera permanente y después esposa de mi prohijado falleció el 24 de mayo del 2004 y con este hecho termino la unión entre los dos.

**QUINTO:** Mi prohijado presentó reclamación de pensión de sobrevivientes el 29 de junio de 2004, con posterioridad al fallecimiento de su compañera permanente y esposa posteriormente, obteniendo por medio de comunicación No. 0200001024655300 la negativa a la pensión de sobreviviente dando como respuesta A.F.P. PORVENIR:





“Al consultar nuestro sistema observamos que la señora **LILIANA ELIZABETH MORENO** no cumplió con el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivencia y auxilio funerario, por causa de enfermedad exigido por la reforma pensional, el cual consiste en cumplir con un 20% de fidelidad de cotización al sistema. Según la norma anteriormente descrita este corresponde al tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió los 20 años de edad (02 de octubre de 1995) y la fecha de su fallecimiento (24 de mayo de 2004), que para el caso en estudio – contando todos los periodos cotizados a los fondos de pensiones obligatorias administrados por PORVENIR S.A. se llegó a un 16.35% de fidelidad al haber cotizado 509 días.”

**SEXTO:** Porvenir desconoce el número de semanas de cotización que se solicitaban para ese momento.

La ley 797 de 2003, que modifico la ley 100 de 1993, establece los requisitos para pensionarse por sobreviviente.

“Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes

Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

(...)

2. los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre y cuando este hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acreditan las siguientes condiciones...

Dicha norma expresaba cincuenta semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, es decir del 25 de mayo de 2001 al 24 de mayo de 2004.

**SÉPTIMO:** Para ese tiempo la señora Liliana Elizabeth García Moreno Contaba con:

Periodo de Pago	Razón Social	Días Cotizados
2001-08	Multiempleos S. A	30
2001-09	Multiempleos S. A	30
2001-09	Avidesa Mac Pollo	7
2001-10	Avidesa Mac Pollo	30
2001-11	Avidesa Mac Pollo	30
2001-12	Avidesa Mac Pollo	30
2002-01	Avidesa Mac Pollo	30
2002-02	Avidesa Mac Pollo	30
2002-03	Avidesa Mac Pollo	30
2002-04	Avidesa Mac Pollo	30
2002-05	Avidesa Mac Pollo	30
2002-06	Avidesa Mac Pollo	30
2002-06	Avidesa Mac Pollo	1
2002-07	Avidesa Mac Pollo	12



2003-05	Incubadora Andina S. A	30
2003-06	Incubadora Andina S. A	30
2003-07	Incubadora Andina S. A	30
2003-08	Incubadora Andina S. A	30
2003-09	Incubadora Andina S. A	30
2003-10	Incubadora Andina S. A	30
2003-11	Incubadora Andina S. A	26
2004-04	Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio	10
2004-05	Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio	24
TOTAL, DIAS		590
TOTAL, SEMANAS		84,28

Como se puede observar se cumplía con el requisito de las cincuenta semanas dentro de los tres años anteriores al cumplimiento de la edad.

Si bien en ese momento se les exigió el requisito de fidelidad al sistema, este ya no está vigente en nuestro ordenamiento jurídico, pues primeramente la Sentencia C-556 de 2009 y posteriormente en diferentes pronunciamientos como lo fue la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia SL-14847 (45677), oct. 29/14, M. P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz).

**OCTAVO:** Para el mes de junio de 2019, mi prohijado radica solicitud a través de apoderado judicial, en la cual solicita nuevamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, cuya causante era su esposa la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA**, fallecida el 24 de mayo de 2004, para lo cual el **FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, niega dicha pretensión, argumentando que no cumplía con el requisito de convivencia mínima de 5 años.

**NOVENO:** Conforme a la anterior decisión del **FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVERNIR S.A.**, se radica recurso de reposición en el cual se adjuntan declaraciones extra juicio para probar la convivencia, desde el año 1998.

**DÉCIMO:** Aún con lo anterior, el **FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, niega la solicitud, argumentando que no se da el cumplimiento de convivencia, aun estando casados al momento de la muerte de la causante con mi prohijado.

**DÉCIMO PRIMERO:** El 10 de julio de 2020, se radica nuevamente solicitud de reconocimiento de pensión de sobreviviente, y el fondo niega nuevamente la referida pretensión con el argumento de no probada la convivencia por un término de cinco años, desconociendo completamente lo expresado por la Honorable Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de Justicia el 03 de junio de 2020 en su Jurisprudencia SL1730-2020 frente a la convivencia del afiliado, en la cual se aclara que, existe la diferencia entre el requisito de convivencia entre pensionados al momento de la muerte y afiliados, siendo para el último el único requisito de encontrarse conviviendo con el afiliado al momento del fallecimiento.



**DÉCIMO SEGUNDO:** El pasado 16 de marzo de 2021, mi poderdante radica nuevamente reclamación administrativa en el Fondo Porvenir, a lo que el 05 de abril de 2021, nuevamente el Fondo le niega dicha pretensión, argumentando que se requería una convivencia como mínima de 5 años, desconociendo completamente la diferencia entre un afiliado y un pensionado.

### **PRETENSIONES**

Con fundamentos en los hechos expuestos, muy comedidamente solicito al Señor Juez, que previo el reconocimiento de mi personería para actuar como apoderado de la parte demandante y cumplidos los trámites del proceso ordinario laboral, se declare:

**PRIMERA.** Condenar a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**, a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes de su cónyuge **LILIANA ELIZABETH GARCÍA MORENO** al señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**.

**SEGUNDA.** Condenar a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**, a que dicho reconocimiento se debe realizar desde el 24 de mayo de 2004, día del fallecimiento de la cónyuge del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO**, la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** hasta el día que se realice efectivamente el pago, para lo cual el total de las mesadas pensionales acumuladas ascienden a **CIENTO VEINTRICUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$124.022.996)**.

**TERCERA.** Condenar a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**, a que pague los correspondientes intereses moratorios conforme al artículo 141 de la Ley 100, desde el 24 de mayo de 2004, día del fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** cónyuge del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO** y hasta el día que se realice efectivamente el pago, los cuales se estiman hasta la fecha de la presentación de la presente demanda en un total de **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE (\$236.778.927)**.

**CUARTA.** Igualmente, la entidad demandada deberá cancelar las sumas de dinero que se deriven de la aplicación de los principios de extra y ultra petita.

**QUINTA.** Condenar a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.** al pago de las costas y agencias en derecho del proceso.

### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: Capítulo XIV artículo 74 y siguiente.

### **RAZONES DE DERECHO**

#### **PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE**



El artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, preceptúa en lo concerniente al derecho a la pensión de sobrevivientes del cónyuge y/o compañeros (as) permanentes, lo siguiente: Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

*a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad.(.) En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;*

*b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con éste (sic). La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).*

*Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.*

Es pertinente que este despacho tenga presente que, a mi prohijado no se le ha otorgado el reconocimiento a la pensión de sobreviviente por parte del Fondo de Pensiones, argumentando que, no se puede comprobar la convivencia de cinco años, toda vez que, solo se está teniendo en cuenta la fecha en la que se llevó a cabo la celebración del matrimonio y desconoce totalmente la vida que sostuvieron como pareja en unión marital de hecho, la cual se ha manifestado y demostrado desde el 05 de enero de 1998.

A continuación, se cita la jurisprudencia que soporta el carácter fundamental de la pensión de sobrevivientes y la posición de la **Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, a través de la sentencia SL-1730 de 2020:**

Como consecuencia de la nueva integración de la Sala, se considera oportuno reevaluar la referida posición jurisprudencial, para sentar una nueva doctrina frente a la correcta interpretación de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que se armonice con los fines del Sistema Integral de Seguridad Social en general, y de la pensión de sobrevivientes en particular, así como con las razones que llevaron a





establecer el requisito mínimo de convivencia allí previsto, y conforme a ellas, bajo qué presupuesto debía operar.

El Sistema de Seguridad Social Integral propende por la obtención de condiciones de vida dignas, mediante la protección de las contingencias que afectan a las personas y a la comunidad. En armonía con lo dispuesto en el art. 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio, que se presta en los términos y condiciones previstas en la ley, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; de ella, hace parte el Sistema General de Pensiones, instituido con la finalidad específica de amparar de las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.

Tal como lo recordó el Tribunal, para definir el contenido constitucional del derecho a la pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de principios, condensados en la sentencia CC C-1035- 2008, así:

1. Principio de estabilidad económica y social para los allegados del causante:

*Desde esta perspectiva, ha dicho la Corte que “la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria”*

2. Principio de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados:

*En el mismo sentido, la Corte ha concluido que la sustitución pensional busca impedir que sobrevinida la muerte de uno de los miembros de la pareja, el otro se vea obligado a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales, por lo cual “el factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge superstite y la compañera o compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes”*

3. Principio material para la definición del beneficiario:

*En la sentencia C-389 de 1996 “(...) la legislación colombiana acoge un criterio material -esto es la convivencia efectiva al momento de la muerte- como elemento central para determinar quién (sic) es el beneficiario de la sustitución pensional, por lo cual no resulta congruente con esa institución que quien haya procreado uno o más hijos con el pensionado pueda desplazar en el derecho a la sustitución pensional a quien efectivamente convivía con el fallecido”*

Por otra parte, al analizar la constitucionalidad del aparte de la disposición que ocupa la atención de la Sala, en la sentencia CC C-1094-2003, la referida Corporación señaló:



### **2.3. Requisitos y beneficiarios de la pensión de sobrevivientes**

Esta Corporación se ha pronunciado acerca de la finalidad y legitimidad de los requisitos de índole temporal o personal que señale el legislador para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Según lo expuesto en la sentencia C-1176 de 2001, **es razonable suponer que las exigencias consignadas en los artículos demandados buscan la protección de los intereses de los miembros del grupo familiar del pensionado que fallece, ante la posible reclamación ilegítima de la pensión por parte de individuos que no tendrían derecho a recibirla con justicia. Igualmente suponer que el señalamiento de exigencias pretende favorecer económicamente a matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con vocación de permanencia; también se ampara el patrimonio del pensionado, de eventuales maniobras fraudulentas realizadas por personas que sólo persiguen un beneficio económico con la sustitución pensional. Por esto, dijo la Corte, con el establecimiento de tales requisitos se busca desestimular la ejecución de conductas que pudieran dirigirse a obtener ese beneficio económico, de manera artificial e injustificada.**

La jurisprudencia constitucional ha resaltado también que el artículo 48 de la Constitución otorga un amplio margen de decisión al legislador para configurar el régimen de la seguridad social.

En ejercicio de esta atribución y de acuerdo con las disposiciones demandadas, las cuales guardan una estrecha relación material entre sí, el legislador distingue entre requisitos exigidos en relación con las condiciones de causante al momento de su fallecimiento (art. 12) y calidades de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (art. 13).

[...]

### **2.5. Constitucionalidad del artículo 13 de la Ley 797**

Los literales a) y b) del artículo 13 en referencia consagran las condiciones para que el cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite sea beneficiario de la pensión de sobrevivientes. De ellas, los accionantes impugnan tres aspectos en particular: i) el requisito de convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte; ii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración a la edad del cónyuge o compañero supérstite; y iii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración al hecho de haber tenido hijos o no con el causante.

Como se indicó, el legislador, de acuerdo con el ordenamiento constitucional, dispone de una amplia libertad de configuración frente a la pensión de sobrevivientes. Además, según lo tiene establecido esta Corporación, el señalamiento de exigencias de índole personal o temporal para que el cónyuge o compañero permanente del causante tengan acceso a la pensión de sobrevivientes “constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás miembros del grupo familiar”

En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de



**disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes.**

*Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social. (Subraya y negrilla fuera de texto)*

Para la Sala, dada la nueva revisión del alcance de la norma acusada, las anteriores consideraciones deben permanecer incólumes, ante lo expuesto por la misma Corte Constitucional en la sentencia CC C-336-2014, aducida por la censura, en la que tangencialmente equiparó el requisito de convivencia mínima, en el caso de afiliado y pensionado, y acto seguido citó la sentencia CC C-1176-2001 y la anteriormente referida, en cuanto al límite temporal exigido a los beneficiarios del pensionado y su legítimo fin; empero, el análisis de constitucionalidad efectuado se encontraba dirigido en esa oportunidad, a otros supuestos contenidos en la norma, esto es, el aparte final del último inciso del literal b) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, por lo que no tiene la virtualidad de modificar lo considerado en la sentencia CC C-1094-2003, además de no constituir el objeto de este recurso.

Y es que, de la redacción del precepto legal, se itera, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida, se encuentra relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado; una intelección distinta, comporta la variación de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinción, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada, así:

*Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:*

*a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. **En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado**, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (subraya y negrilla fuera de texto)*

Adicionalmente, en la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, cuando se procedió a la sustentación de los preceptos del proyecto de ley, en lo concerniente al artículo 17 «BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES», se precisó que “Se regulan los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes estableciendo uniformidad entre los regímenes de prima media y de ahorro individual con solidaridad. **Adicionalmente se establece que el cónyuge o compañero permanente debe haber convivido con el pensionado por lo menos cuatro años antes de fallecimiento con el fin de evitar fraudes**” (subraya y negrilla fuera de texto).





Desde la expedición de la Ley 100 de 1993, ha sido clara la intención del legislador al establecer una diferenciación entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte de **afiliados** al sistema no pensionados, y la de **pensionados**, esto es, la conocida como sustitución pensional, previendo como requisito tan solo en este último caso, un tiempo mínimo de convivencia, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, «*convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes*», por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión.

La evidente y contundente distinción efectuada por el legislador en el precepto que se analiza, comporta una legítima finalidad, que perfectamente se acompasa con la principal de la institución que regula, la protección del núcleo familiar del asegurado o asegurada que fallece, que puede verse afectado por la ausencia de la contribución económica que aquel o aquella proporcionaba, bajo el entendido de la ayuda y soporte mutuo que está presente en la familia, que ya sea constituida por vínculos naturales o jurídicos, que en todas sus modalidades se encuentra constitucionalmente protegida, como núcleo esencial de la sociedad (art. 42 CN).

En este punto resulta necesario precisar, que conforme al análisis hasta aquí efectuado, de lo dispuesto en el **literal a)** del art. 13 de la Ley 797 de 2003, para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado al sistema que fallece, no es exigible ningún tiempo *mínimo* de convivencia, toda vez que con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el *literal de la norma analizado*, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia, esto es, la pensión de sobrevivientes, o en su caso, la indemnización sustitutiva de la misma o la devolución de saldos, de acuerdo al régimen de que se trate, y el cumplimiento de los requisitos para la causación de una u otra prestación.

Lo anterior comporta también que, contrario a lo considerado por el Tribunal, para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, no hay lugar a efectuar ninguna distinción entre beneficiarios de un mismo tipo de causante, para el caso un afiliado, esto es, según la forma en la que se constituya el núcleo familiar, si lo es por vínculos jurídicos o naturales, en tanto éste, es decir, el núcleo familiar, es lo que protege el Sistema General de Seguridad Social. Así lo recordó la Corte Constitucional, en el análisis de constitucionalidad efectuado al art. 163 de la Ley 100 de 1993, antes de ser modificado por el art. 218 de la Ley 1753 de 2015, en la sentencia CC C- 521-2007, que en torno al concepto de familia y su protección sin discriminación, en consideraciones que se avienen al Sistema Pensional, precisó:

*Además de ser denominada constitucionalmente como el núcleo fundamental de la sociedad (C.Po. art. 42), la familia ha sido definida por la Corte Constitucional como “Aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes más próximos”. De su parte, el artículo 5º. de la Carta Política establece que el Estado ampara a la familia como institución básica de la sociedad, mientras el inciso segundo del*



artículo 42 superior prevé que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.

La jurisprudencia ha señalado el marco constitucional de protección para la familia en los siguientes términos:

*“(...) en nuestro país el régimen constitucional de la familia quedó definido: (i) en el artículo 5° de la Carta, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, al reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (vi) en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; (vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella; y (viii) en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral”*

#### **4. Competencia del legislador para regular el servicio de seguridad social**

4.1. Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 48, 49, 53 y 150 de la Constitución Política, el Congreso de la República cuenta con atribuciones amplias para configurar el sistema normativo a partir del cual se presta el servicio público de seguridad social. Por tratarse de una actividad que implica atención para el bienestar de la comunidad en materia de salud, con eventuales contingencias para la vida de los asociados, el constituyente quiso que la relación entre las instituciones prestadoras del servicio y los usuarios del mismo, fuera gobernada mediante un sistema legal específico en el cual la voluntad de los contratantes juega un rol secundario frente a las decisiones del legislador, siempre y cuando éstas sean conformes con lo dispuesto en la Carta Política.

Además de servicio público, la seguridad social en salud es un derecho de carácter prestacional consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, concebido como mandato dirigido al Estado Social de Derecho, para ensamblar un sistema conformado por entidades y procedimientos encaminados a ofrecer una cobertura general ante las contingencias que puedan afectar la salud de las personas. Según el constituyente, este derecho ha de ser garantizado con sujeción a los principios de eficiencia, continuidad, universalidad, buena fe y solidaridad, para la prevención, promoción y protección de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados.

4.2 El marco jurídico diseñado por el constituyente permite al legislador configurar el sistema de seguridad social en salud, dentro de los límites propios del Estado Social de Derecho y de conformidad con los principios, derechos y garantías establecidos en la



*Constitución Política. Precisamente, el Estatuto Superior consagró una protección igual para las uniones familiares constituidas por vínculos naturales y jurídicos, como también para las conformadas por la decisión libre de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarla.*

[...]

*4.8. Para la Sala, la exigencia de convivir durante un lapso superior a dos años para lograr afiliarse como beneficiario del Plan Obligatorio de Salud al compañero (a) permanente, quebranta los derechos a la igualdad, seguridad social, salud, vida, libre desarrollo de la personalidad y protección integral de la familia, por cuanto el constituyente consagró una protección igual para las uniones familiares constituidas por vínculos naturales o jurídicos, como también para las conformadas por la decisión libre de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarlas.*

*Desde una perspectiva constitucional no existe una justificación objetiva y razonable para otorgarle un trato distinto al cónyuge a quien no se le impone la obligación de cumplir un determinado período de convivencia con el afiliado, mientras que el compañero(a) no puede ser afiliado al POS si la unión permanente es inferior a dos años. Sobre esta materia es pertinente recordar el texto del artículo 42 de la Carta Política, según el cual:*

[...]

*4.10. La diferencia de trato entre el cónyuge del afiliado y el compañero (a) permanente del afiliado a quien se impone la obligación de convivir durante un período mínimo de dos años para acceder a las mismas prestaciones, no está justificada bajo parámetros objetivos y razonables, por cuanto se impone a éste último la carga de permanecer durante dos años sin los beneficios propios del Plan Obligatorio de Salud, brindándole como explicación que se trata de un lapso efímero durante el cual podría afiliarse como trabajador independiente al régimen contributivo o al régimen subsidiado, o acceder a los servicios en calidad de vinculado.*

*Similares consideraciones podrían hacerse respecto del cónyuge a quien la norma ampara como beneficiario a partir del matrimonio; sin embargo, la disposición, contrariando lo dispuesto en el artículo 13 superior, ordena darle al compañero (a) permanente un trato discriminatorio al imponerle una carga desproporcionada, en cuanto a pesar de estar conformando una familia lo obliga a permanecer durante dos años por fuera del ámbito de cobertura señalado en el artículo 163 de la ley 100 de 1993.*

[...]

*Mientras el artículo 2º. de la ley 54 de 1990 regula el régimen económico de las uniones maritales de hecho, el artículo 163 de la ley 100 de 1993 se aplica a la cobertura familiar en el Plan Obligatorio de Salud; es decir, una y otra disposición son ontológicamente diferentes, la primera aplicable a las consecuencias económicas derivadas de la unión marital de hecho, al paso que la segunda está relacionada con la protección integral de la familia en cuanto a la prestación del servicio de seguridad social en salud se refiere, materia ésta que vincula la protección eficaz de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a no ser discriminado en razón del origen familiar.*

*Por esta razón, desde una perspectiva constitucional el término de dos años previsto en el artículo 2º. de la ley 54 de 1990 y el de dos años establecido en el artículo 163 de la ley 100 de 1993, no pueden ser considerados como similares ni mucho menos homologables, pues*



*uno y otro atienden a un origen y a unos propósitos sustancialmente distintos.*

En cuanto a lo dispuesto en el art. 10 del Decreto 1889 de 1994, que prevé que se considera compañera o compañero permanente para efectos de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de un afiliado, la última persona que haya hecho vida marital con aquel durante un lapso no inferior a dos (2) años, otrora se consideró por la Sala había perdido fuerza con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, por ser de mayor jerarquía y prevalecer sobre el aludido decreto (CSJ SL1402-2015), y posteriormente, que no resultaba aplicable por cuanto reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993, en su versión primigenia, no así la Ley 797 de 2003 (CSJ SL347-2019). En esta oportunidad, recoge esta última tesis la Sala, para precisar que el Decreto 1889 de 1994 reglamentó parcialmente las normas del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por lo que cobijaba las modificaciones a las mismas, siempre que no resultara contrario a ellas.

Empero, como el decreto reglamentario no puede ir más allá de lo dispuesto en la ley, imponiendo requisitos que superen lo legalmente establecido, como lo hizo en su artículo 10, que no está por demás indicar fue subrogado por el artículo 2.2.8.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, se considera que, para determinar quién ostenta la calidad de compañero o compañera permanente de un afiliado, a efectos de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, debe acudirse a la noción constitucional de familia, en la forma en la que ha sido ampliamente analizada por la Corte Constitucional, entre otras, en la providencia citada.

Con lo anterior, la Sala fija el verdadero alcance de la disposición acusada, a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, *in dubio pro operario*, esto es, que la convivencia mínima de cinco (5) años, en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado.

Descendiendo al caso concreto, es importante y pertinente resaltarle a este honorable despacho, que mi prohijado al momento de la muerte de la causante la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**, tenían vínculo matrimonial vigente, para lo cual, conforme a esta posición de la Corte Suprema de Justicia y la reiterada por la Corte Constitucional, se ha negado a mi prohijado el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes con el argumento de que aplica para el, el requisito de los cinco años, sin tener en cuenta la amplia jurisprudencia ya citada, en la cual se hace claridad de que estos cinco años, son requisitos exigibles cuando el causante ya es pensionado. Dejando este fundamento jurisprudencial sin ningún tipo de fundamentos los argumentos esgrimidos por el **FONDO DE PENSIONES** para otorgar la pensión de sobreviviente al señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO**.





Por otra parte, la Honorable Corte Constitucional a través de la sentencia **T-370/17** de 06 de junio de 2017, M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, refirió:

*“(…) La pensión de sobrevivientes tiene como objetivo la protección a la familia del pensionado, concediéndoles la prestación que éste percibía en vida y de este modo permitirles gozar del estatus del que gozaba el trabajador, antes de su fallecimiento. Además, dicha prestación puede llegar a tener el carácter de fundamental si con su ausencia se afecta el mínimo vital del solicitante (…).”*

## **INTERESES MORATORIOS**

Para empezar, es propicio remitirse a la normativa que contempla los intereses moratorios, según lo establecido en la Ley 100 de 1993 en el artículo 141, que en su tenor expresa:

***“ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago”.***

Así mismo, se tiene en cuenta lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 12 de julio de 2013, Radicación No.66001-31-05-001-2012-00576-01, Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón, expresó:

*“Para que los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 empiecen a correr es necesario que: (i) el interesado haya elevado la solicitud al fondo pensional respectivo, habiendo cumplido los requisitos legales para acceder a la prestación y, (ii) que la entidad desconozca los términos establecidos en las leyes 700 y 717 de 2001 y 797 de 2003.”*

*“(…) Recordemos que en relación con el derecho a percibir los intereses en caso de mora en el pago de mesadas pensionales -que prevé el Artículo 141 de la Ley 100 de 1993-, desde antaño y sin virajes, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha insistido en que los mismos no tienen carácter sancionatorio sino de resarcimiento; por manera que la causación del derecho a percibirlos no está sujeta a condiciones o requisitos distintos al incumplimiento de la respectiva obligación pensional, la cual surge cuando se consolida el derecho prestacional por reunirse los requisitos establecidos en la ley”.*

Ahora bien, la misma Corporación en sentencia 085 del 16 de septiembre de 2010, con ponencia de la Dra. María Matilde Trejos Aguilar, estableció:

*“(…) De allí que resulte obvio que sólo a partir de la reclamación del derecho y del vencimiento de los términos previstos en la ley para que la administradora decida, o desde el momento en que lo haga negativamente, siendo del caso haber reconocido la prestación, puede hablarse de una posible obligación en mora”.*

Por otra parte, y no menos importante, es la posición que ha sostenido la honorable Corte Constitucional, frente al reconocimiento de los intereses moratorios de las mesadas pensionales, para lo cual en la **SU-065-2018**, se ha desarrollado de la siguiente manera:



### 6.3 Interpretación jurisprudencial de artículo 141 de la Ley 100 de 1993

Del artículo 46 Superior se desprende un deber positivo en cabeza del Estado de dispensar un trato especial a las personas de la tercera edad. Esta obligación va dirigida al Estado, a la sociedad y a la familia, consiste en la protección y asistencia de las personas de la tercera edad, a través de la promoción de su *“integración a la vida activa y comunitaria”*.

La Corte Constitucional ha manifestado que entre los sujetos de especial protección constitucional se encuentran los “adultos mayores” o “personas de la tercera edad”, quienes dado su estado de debilidad, merecen mayor amparo de la sociedad y del Estado. Por ejemplo, en la sentencia T-463 de 2003, esta Corporación expresó lo siguiente:

*“Entre los sujetos de especial tutela constitucional se encuentran los adultos mayores, quienes al alcanzar cierta edad ven disminuida su capacidad física y con ello la posibilidad de ejercer en toda su dimensión algunos de sus derechos. Dada esta pérdida progresiva de - entre otras cosas- la fuerza laboral, es probable que la única fuente de ingresos que puedan percibir sea la pensión. **Es por esto que resulta especialmente grave la no cancelación o la cancelación parcial de las mesadas pensionales, pues ello puede menoscabar el derecho a disfrutar de condiciones de vida digna, el derecho a la salud y el derecho al mínimo vital, entre otros, de las personas ancianas**”.* (Negrilla fuera del texto original)

En concordancia con lo anterior, desde el año 1995 en sede de control abstracto de constitucionalidad, esta Corporación resaltó la importancia del reconocimiento oportuno de las mesadas pensionales para las personas de la tercera edad. Así, en la Sentencia C-367 de 1995, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 1617 del Código Civil<sup>1</sup>. Para arribar a dicha conclusión, señaló que del artículo 53 Superior se desprende el derecho de los pensionados a recibir las mesadas pensionales de forma oportuna. En palabras de la Corte:

*“No puede concebirse, entonces, a la luz de los actuales principios y preceptos superiores, la posibilidad de que las pensiones pagadas de manera tardía no generen interés moratorio alguno, con el natural deterioro de los ingresos de los pensionados en términos reales, (...). Además, **ninguna razón justificaría que los pensionados, casi en su mayoría personas de la tercera edad cuyo único ingreso es generalmente la pensión, tuvieran que soportar, sin ser adecuadamente resarcidos, los perjuicios causados por la mora y adicionalmente la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el***

---

<sup>1</sup> **“ARTICULO 1617-** Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes: 1. Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. El interés legal se fija en seis por ciento anual. 2. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo. 3. Los intereses atrasados no producen interés. 4. La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.



***incumplimiento de las entidades correspondientes***". (Negrilla fuera del texto original)

Posteriormente, en la Sentencia **C-601 de 2000**, la Corte conoció la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en la cual el demandante expresó que *"los segmentos normativos "A partir del 1º de enero de 1994" y "de que trata esta ley", contenidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993"*, vulneran el derecho fundamental a la igualdad (art. 13 CP) de aquellas personas que bajo la vigencia de leyes anteriores a la pluricitada Ley 100 de 1993, obtuvieron el derecho al reconocimiento y pago de su pensión, al excluirlas del reconocimiento y pago de los intereses moratorios con ocasión del pago tardío de las mesadas pensionales<sup>2</sup>.

En la Sentencia precitada, esta Corporación declaró exequibles los apartados demandados tras considerar que el artículo 141 parcialmente cuestionado no desconocía el artículo 13 Superior, en tanto que la comprensión correcta de esa prescripción indica que se aplica a todo tipo de pensiones, sin distinción alguna. Tal conclusión se derivó de la interpretación de la mencionada disposición, la cual se sustentó en las siguientes premisas argumentativas:

- (i) El reconocimiento de los intereses moratorios tiene por finalidad proteger a las personas de la tercera edad, quienes debido a su estado de salud o físico *"se encuentran imposibilitadas para obtener otra clase de recursos para su propia subsistencia o la de su familia"*, por lo que el pago tardío de sus mesadas pensionales puede comprometer su mínimo vital;
- (ii) El artículo 141 de la ley 100 de 1993 incorporó en el ordenamiento jurídico colombiano *"un mecanismo de liquidación para cancelar las pensiones atrasadas o en mora, sin que el legislador distinguiera en el tiempo o en el espacio a determinados grupos de pensionados"*;
- (iii) La disposición acusada no crea ningún tipo de distinciones entre pensionados o clases de pensiones. En realidad, el legislador estableció una distinción el tiempo, es decir, en el momento en el cual se produce la mora para efectos de saber cuál es la normatividad vigente con base en la que deberá hacerse su cálculo.
- (iv) La correcta interpretación del enunciado legal censurado *"advierde que a partir del 1º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por causa de muerte, que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado, sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de*

---

<sup>2</sup> El problema jurídico planteado en aquella oportunidad correspondió con: A juicio el demandante, al ser expedidos los segmentos normativos "A partir del 1º de enero de 1994" y "de que trata esta ley", contenidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, el legislador vulneró el derecho fundamental a la igualdad de aquellas personas que bajo la vigencia de leyes anteriores a la citada ley 100 de 1993, obtuvieron el derecho al reconocimiento y pago de su pensión, pues se les excluye del reconocimiento y pago de los intereses moratorios que se ocasionarían en el evento en el cual sus mesadas pensionales le fuesen pagadas de manera atrasada o tardía.



*pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la tasa máxima del interés moratorio vigente. Es decir, la disposición acusada no distingue entre pensionados, pues, sólo alude al momento en el cual se produce la mora para efectos de su cálculo”.*

En este orden de ideas, señaló que las entidades de seguridad social “están obligadas a indemnizar a los pensionados por la cancelación tardía de las mesadas pensionales atrasadas que se les adeudan, pues el artículo 53 de la Carta es imperativo y contundente al disponer que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones”. De lo que se desprende que el artículo 141 de la ley 100 de 1993, desarrolló plenamente el artículo 53 Superior. En este sentido, expresó la Sala Plena que el artículo 141 no crea privilegios entre grupos de pensionados que adquirieron su derecho pensional bajo diferentes regímenes jurídicos:

*“[L]a Corte debe advertir que los pensionados siempre han tenido derecho al pago de intereses de mora cuando las mesadas correspondientes les han sido canceladas de manera atrasada; por lo tanto, **el derecho al reconocimiento y pago de los intereses de mora a los que hace referencia la norma en comento, es un derecho de todos los pensionados, sin importar el momento en el cual se haya reconocido el derecho al disfrute de la pensión respectiva**”.* (Negrilla fuera del texto original)

La Sala Plena fijó la interpretación de la mencionada disposición, al precisar la manera en que debe entenderse, con el fin de que se mantuviera en el ordenamiento jurídico. Ese sentido corresponde con la idea de que todas las pensiones, legales o convencionales, son pasibles de causación de intereses de mora por su pago tardío. En realidad, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 regula la forma de calcular esos réditos y no su existencia u origen<sup>3</sup>. La normatividad del sistema general de seguridad social tiene una expansión para todo tipo de pensiones, como sucede en este aspecto.

En sede de control concreto y siguiendo la *ratio decidendi* de la Sentencia C-601 de 2000, la Corte Constitucional ha reconocido el pago de los intereses moratorios ante la liquidación tardía de las mesadas pensionales. Por ejemplo, en la Sentencia T-635 de 2010, la Corte reiteró lo dicho en sede de control abstracto. Expresó que la regla jurisprudencial sentada en dicha providencia parte de considerar que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 son aplicables a toda clase de pensiones, sean estas reconocidas por mandato legal, convencional o particular.

Más adelante, en la Sentencia **T-849A de 2013**, la Sala Séptima de Revisión conoció la acción de tutela instaurada por el Departamento del Chocó, contra el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, Chocó, en la cual solicitó la protección del derecho fundamental al debido proceso que estimó vulnerado con la sentencia proferida por la autoridad accionada, al declarar al ente territorial responsable

---

<sup>3</sup> En Sentencia C-601 de 2001, se expresó “de suerte que si ésta se produjo con anterioridad al 1º de enero de 1994, ésta se deberá calcular de conformidad con la normativa vigente hasta ese momento, esto es, el artículo 8º de la ley 10 de 1972, reglamentada por el artículo 6º del decreto 1672 de 1973, y eventualmente, por aplicación analógica de algunos criterios plasmados en el Código Civil colombiano, diferentes al artículo 1617 de la misma obra, y si la mora se produjo después de esa fecha su valor se deberá calcular con base en los lineamientos contenidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993.”





administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados a los accionantes debido al pago tardío de las mesadas pensionales a su cargo. En esta oportunidad la Corte afirmó que *“aunque es cierto que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que en casos como la materia de análisis no procede el pago de intereses moratorios, esta Corporación ha sostenido la tesis contraria, esta es que los intereses moratorios se causan por el pago tardío de cualquier pensión, independientemente de que hayan sido reconocidas con fundamento en normativa anterior a la Ley 100”*.

Finalmente, en la Sentencia de Unificación **SU-230 de 2015**, este Tribunal indicó que la Sentencia C-601 de 2000, *“fijó el alcance y contenido en la interpretación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, estableciendo que los mismos proceden para todo tipo de pensión, sin importar la ley o el régimen mediante los cuales se causaron”*.

6.3.2.3. Así las cosas, la postura asumida por la Corte Constitucional, en sede de control abstracto y concreto, indica que las entidades encargadas del reconocimiento de prestaciones propias del sistema de seguridad social están obligadas a reconocer el pago de intereses por mora a los pensionados a quienes se les ha reconocido su derecho prestacional en virtud de un mandato legal, convencional o particular. Inclusive, ello sucede con independencia de que su derecho haya sido reconocido con fundamento en la Ley 100 de 1993 o una ley o régimen anterior, por lo que la moratoria se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de las mesadas pensionales, en aplicación del artículo 53 Superior.

Así mismo, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 1° de octubre de 2014, radicación 46.786, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, estableció:

*“Los intereses moratorios fueron creados por la Ley 100 de 1993 como una respuesta al incumplimiento de las entidades de seguridad social que estando obligadas al pago de las mesadas pensionales de que trata la Ley aludida, lo dilatan o retarden.*

*Lo que hace esta disposición es proteger a los pensionados frente a la mora en el pago de sus mesadas pensionales. Por ello resulta justo y equitativo que cuando las entidades de seguridad social incurren en mora o se retrasan en el pago de las mesadas, reparen los perjuicios ocasionados a los pensionados afectados, pagando además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el correspondiente pago”*.

Es preciso advertir, que el señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS** presentó la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en el año 2004 a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.**, para dicha data había cumplido con los requisitos exigidos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivencia, puesto que acreditó que era el esposo de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA (QEPD)**, que no conocía herederos con mayor o igual derecho al que poseía ella, y que dependía económicamente de la misma.



Al respecto, cabe mencionar que la entidad accionada a través de oficio con radicado No. 0200001024655300 del 04 de agosto de 2004, procedió a negar el derecho pensional bajo el argumento de que no se había acreditado fidelidad. El 11 de noviembre de 2008, el fondo procede a responder frente a la Devolución de Saldos a favor del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO**, devolución que no acepta mi prohijado.

En consecuencia, la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.** debe resarcir por la cancelación tardía de la pensión debido a la omisión del fondo en reconocer la prestación desde el momento en que se hizo exigible el derecho, por lo que los intereses moratorios se deben efectuar por los perjuicios causados a partir del 24 de mayo de 2004, día del fallecimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCÍA MORENO** esposa del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO** y hasta el día que se realice efectivamente el pago.

## **PRUEBAS**

### **1. DOCUMENTALES**

Solicito del Despacho darle valor probatorio en favor de mi representada a los siguientes documentos:

1. Fotocopia simple de la cédula del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**.
2. Copia simple de Registro civil de nacimiento del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**.
3. Copia simple de Registro Civil de nacimiento de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**.
4. Copia simple de Registro Civil de Matrimonio de los señores **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS y LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**.
5. Copia simple de Registro Civil de Defunción de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**, del día 24 de mayo de 2004.
6. Copia simple de la Relación Histórica de Movimientos Porvenir, correspondientes a la historia laboral de la señora **LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO**.
7. Copia simple de oficio con radicado 0200001024655300 del 04 agosto de 2004 remitido por el **FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**, al señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO**, dónde se le niega por primera vez el derecho a la pensión de sobreviviente.
8. Copia simple de oficio con radicado 0200001061231800 del 11 noviembre de 2008 remitido por el **FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**, al señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO**, dónde se le informa que, se le concede el derecho a la devolución de saldos, con ocasión a ser el único beneficiario.
9. Copia de declaración extra juicio del 04 de junio de 2019 del señor **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**, en el cual se declara la convivencia entre los señores **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS y LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** desde 05 de enero de 1998.
10. Copia de declaración extra juicio del 21 de febrero de 2020 de la señora **MARCELA RENGIFO RIOS**, en el cual se declara la convivencia entre los señores **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS y LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** desde 05 de enero de 1998.
11. Copia de declaración extra juicio del 19 de febrero de 2020 del señor **CATELBLANCO MARTINEZ NICOLAS**, en el cual se declara la convivencia entre los señores **FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS y LILIANA ELIZABETH GARCIA MORENO** desde 05 de enero de 1998.

12. Fotocopia simple de derecho de petición radicado el 04 de junio de 2019 con número 0105646012776500.
13. Fotocopia respuesta oficio con radicado 0105646012776500 emitido por la entidad **PORVENIR** del 13 de junio de 2019.
14. Copia de recurso de reconsideración o revisión radicada el 04 de julio de 2019 con radicado 0105646012825000.
15. Copia de Derecho de Petición radicado bajo el número 0105646013337100 radicado el 10 de julio de 2020.
16. Copia respuesta a Derecho de petición emitida por **PORVENIR** con radicado 010564601.
17. Copia reclamación administrativa radicada a **PORVENIR** con radicado 0103880009838700 del 16 de marzo de 2021.
18. Copia respuesta enviada por **PORVENIR** el 05 de abril de 2021, con radicado de **PORVENIR** 0105646013337100

JURAMENTO ESTIMATORIO

Se estima la cuantía del presente proceso en un total de **TRESCIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE**, los cuales están liquidados de la siguiente forma:

FECHAS		VALOR MESADA A RELIQUIDAR	OTROS	
FECHA INICIAL	2004-05-24		MESADAS ADICIONALES	INTERES DE MORA
FECHA FINAL	2021-04-09	\$ 358.000	Jun-Dic	Sin INDEXAR
INT MORA DESDE	2004-08-04			

RESUMEN LIQUIDACION	VALOR MESADA ACUMULADA (A)	124.022.996,67
	SIN INDEXACION	0,00
	INTERES MORATORIO	236.778.927,23
	VALOR TOTAL	360.801.923,90

PERIODO	Días	% INCREMENTO IPC	X	VALOR MESADAS	VR MESADA ACUMULADA	IPC INICIAL DEL AÑO	INDEXACION	% INTERESES DE MORA	VR INTERESES DE MORA
2004-05	6	0,00%		71.600	71.600	55,17188	-	0,00%	-
2004-06	30	0,00%		716.000	787.600	55,50484	-	0,00%	-
2004-07	30	0,00%		358.000	1.145.600	55,48769	-	0,00%	-
2004-08	30	0,00%		358.000	1.503.600	55,50445	-	1,91%	28.656
2004-09	30	0,00%		358.000	1.861.600	55,66885	-	2,14%	39.818
2004-10	30	0,00%		358.000	2.219.600	55,66334	-	2,10%	46.585
2004-11	30	0,00%		358.000	2.577.600	55,81792	-	2,15%	55.365
2004-12	30	0,00%		716.000	3.293.600	55,98470	-	2,14%	70.426
2005-01	30	5,50%		377.690	3.671.290	56,44495	-	2,13%	78.360



2005-02	30	0,00%	377.690	4.048.980	57,02210	-	2,13%	86.212
2005-03	30	0,00%	377.690	4.426.670	57,46317	-	2,11%	93.195
2005-04	30	0,00%	377.690	4.804.360	57,71526	-	2,11%	101.333
2005-05	30	0,00%	377.690	5.182.050	57,95068	-	2,09%	108.426
2005-06	30	0,00%	755.380	5.937.430	58,18306	-	2,08%	123.267
2005-07	30	0,00%	377.690	6.315.120	58,21139	-	2,04%	128.928
2005-08	30	0,00%	377.690	6.692.810	58,21227	-	2,02%	134.932
2005-09	30	0,00%	377.690	7.070.500	58,46130	-	2,01%	142.408
2005-10	30	0,00%	377.690	7.448.190	58,59582	-	1,99%	147.914
2005-11	30	0,00%	377.690	7.825.880	58,66279	-	1,97%	154.488
2005-12	30	0,00%	755.380	8.581.260	58,70280	-	1,94%	166.684
2006-01	30	4,85%	396.008	8.977.268	59,02068	-	1,93%	173.130
2006-02	30	0,00%	396.008	9.373.276	59,40886	-	1,94%	182.254
2006-03	30	0,00%	396.008	9.769.284	59,82609	-	1,92%	187.434
2006-04	30	0,00%	396.008	10.165.292	60,09399	-	1,87%	189.966
2006-05	30	0,00%	396.008	10.561.300	60,29097	-	1,80%	190.159
2006-06	30	0,00%	792.016	11.353.316	60,47444	-	1,75%	199.141
2006-07	30	0,00%	396.008	11.749.324	60,72426	-	1,70%	199.717
2006-08	30	0,00%	396.008	12.145.332	60,96254	-	1,69%	205.705
2006-09	30	0,00%	396.008	12.541.340	61,13702	-	1,70%	212.838
2006-10	30	0,00%	396.008	12.937.348	61,04861	-	1,70%	219.823
2006-11	30	0,00%	396.008	13.333.356	61,19330	-	1,70%	226.552
2006-12	30	0,00%	792.016	14.125.372	61,33147	-	1,70%	240.009
2007-01	30	4,48%	413.749	14.539.121	61,80158	-	1,57%	228.107
2007-02	30	0,00%	413.749	14.952.870	62,52589	-	1,57%	235.011
2007-03	30	0,00%	413.749	15.366.619	63,28433	-	1,57%	241.514
2007-04	30	0,00%	413.749	15.780.368	63,85370	-	1,87%	294.899
2007-05	30	0,00%	413.749	16.194.117	64,04501	-	1,87%	302.631
2007-06	30	0,00%	827.498	17.021.615	64,12340	-	1,87%	318.095
2007-07	30	0,00%	413.749	17.435.364	64,22920	-	2,09%	364.579
2007-08	30	0,00%	413.749	17.849.114	64,14345	-	2,09%	373.231
2007-09	30	0,00%	413.749	18.262.863	64,19695	-	2,09%	381.882
2007-10	30	0,00%	413.749	18.676.612	64,20074	-	2,31%	430.970
2007-11	30	0,00%	413.749	19.090.361	64,50511	-	2,31%	440.517
2007-12	30	0,00%	827.498	19.917.859	64,82370	-	2,31%	459.612
2008-01	30	5,69%	437.291	20.355.151	65,50785	-	2,36%	480.736
2008-02	30	0,00%	437.291	20.792.442	66,49755	-	2,36%	491.064
2008-03	30	0,00%	437.291	21.229.734	67,03451	-	2,36%	501.391
2008-04	30	0,00%	437.291	21.667.025	67,51120	-	2,37%	513.488
2008-05	30	0,00%	437.291	22.104.316	68,14020	-	2,37%	523.851
2008-06	30	0,00%	874.583	22.978.899	68,72770	-	2,37%	544.578
2008-07	30	0,00%	437.291	23.416.191	69,05890	-	2,33%	545.956





2008-08	30	0,00%	437.291	23.853.482	69,19101	-	2,33%	556.151
2008-09	30	0,00%	437.291	24.290.774	69,05900	-	2,33%	566.347
2008-10	30	0,00%	437.291	24.728.065	69,29808	-	2,28%	564.973
2008-11	30	0,00%	437.291	25.165.357	69,49142	-	2,28%	574.964
2008-12	30	0,00%	874.583	26.039.939	69,79878	-	2,28%	594.946
2009-01	30	7,67%	470.832	26.510.771	70,21012	-	2,23%	591.876
2009-02	30	0,00%	470.832	26.981.603	70,79780	-	2,23%	602.388
2009-03	30	0,00%	470.832	27.452.435	71,15101	-	2,23%	612.900
2009-04	30	0,00%	470.832	27.923.266	71,37954	-	2,21%	618.239
2009-05	30	0,00%	470.832	28.394.098	71,38958	-	2,21%	628.664
2009-06	30	0,00%	941.663	29.335.761	71,34959	-	2,21%	649.513
2009-07	30	0,00%	470.832	29.806.593	71,32184	-	2,06%	612.993
2009-08	30	0,00%	470.832	30.277.425	71,35329	-	2,06%	622.676
2009-09	30	0,00%	470.832	30.748.256	71,27511	-	2,06%	632.359
2009-10	30	0,00%	470.832	31.219.088	71,18409	-	1,92%	599.798
2009-11	30	0,00%	470.832	31.689.920	71,13735	-	1,92%	608.844
2009-12	30	0,00%	941.663	32.631.583	71,19602	-	1,92%	626.935
2010-01	30	2,00%	480.248	33.111.832	71,68427	-	1,81%	598.410
2010-02	30	0,00%	480.248	33.592.080	72,27814	-	1,81%	607.089
2010-03	30	0,00%	480.248	34.072.328	72,45984	-	1,81%	615.769
2010-04	30	0,00%	480.248	34.552.577	72,79345	-	1,72%	595.541
2010-05	30	0,00%	480.248	35.032.825	72,86863	-	1,72%	603.819
2010-06	30	0,00%	960.497	35.993.322	72,95148	-	1,72%	620.374
2010-07	30	0,00%	480.248	36.473.570	72,92074	-	1,69%	614.770
2010-08	30	0,00%	480.248	36.953.818	73,00258	-	1,69%	622.865
2010-09	30	0,00%	480.248	37.434.067	72,90349	-	1,69%	630.960
2010-10	30	0,00%	480.248	37.914.315	72,83918	-	1,61%	610.779
2010-11	30	0,00%	480.248	38.394.563	72,98051	-	1,61%	618.515
2010-12	30	0,00%	960.497	39.355.060	73,45380	-	1,61%	633.988
2011-01	30	3,17%	495.472	39.850.532	74,12223	-	1,75%	698.993
2011-02	30	0,00%	495.472	40.346.004	74,56888	-	1,75%	707.684
2011-03	30	0,00%	495.472	40.841.477	74,76988	-	1,75%	716.375
2011-04	30	0,00%	495.472	41.336.949	74,85899	-	1,96%	811.118
2011-05	30	0,00%	495.472	41.832.421	75,07220	-	1,96%	820.840
2011-06	30	0,00%	990.944	42.823.365	75,31086	-	1,96%	840.285
2011-07	30	0,00%	495.472	43.318.838	75,41551	-	2,05%	890.035
2011-08	30	0,00%	495.472	43.814.310	75,39216	-	2,05%	900.215
2011-09	30	0,00%	495.472	44.309.782	75,62493	-	2,05%	910.395
2011-10	30	0,00%	495.472	44.805.254	75,76844	-	2,13%	953.718
2011-11	30	0,00%	495.472	45.300.726	75,87388	-	2,13%	964.265
2011-12	30	0,00%	990.944	46.291.671	76,19171	-	2,13%	985.358
2012-01	30	3,73%	513.953	46.805.624	76,74845	-	2,18%	1.020.112



2012-02	30	0,00%	513.953	47.319.578	77,21721	-	2,18%	1.031.313
2012-03	30	0,00%	513.953	47.833.531	77,31146	-	2,18%	1.042.515
2012-04	30	0,00%	513.953	48.347.484	77,42308	-	2,24%	1.081.559
2012-05	30	0,00%	513.953	48.861.437	77,65538	-	2,24%	1.093.056
2012-06	30	0,00%	1.027.907	49.889.344	77,71967	-	2,24%	1.116.051
2012-07	30	0,00%	513.953	50.403.297	77,70288	-	2,27%	1.143.909
2012-08	30	0,00%	513.953	50.917.251	77,73475	-	2,27%	1.155.573
2012-09	30	0,00%	513.953	51.431.204	77,95733	-	2,27%	1.167.237
2012-10	30	0,00%	513.953	51.945.157	78,08470	-	2,27%	1.180.551
2012-11	30	0,00%	513.953	52.459.111	77,97794	-	2,27%	1.192.231
2012-12	30	0,00%	1.027.907	53.487.017	78,04724	-	2,27%	1.215.593
2013-01	30	2,44%	526.494	54.013.511	78,27981	-	2,26%	1.220.350
2013-02	30	0,00%	526.494	54.540.005	78,62748	-	2,26%	1.232.245
2013-03	30	0,00%	526.494	55.066.499	78,78925	-	2,26%	1.244.141
2013-04	30	0,00%	526.494	55.592.992	78,98854	-	2,27%	1.260.277
2013-05	30	0,00%	526.494	56.119.486	79,20869	-	2,27%	1.272.212
2013-06	30	0,00%	1.052.988	57.172.474	79,39470	-	2,27%	1.296.083
2013-07	30	0,00%	526.494	57.698.968	79,43033	-	2,22%	1.280.812
2013-08	30	0,00%	526.494	58.225.461	79,49658	-	2,22%	1.292.499
2013-09	30	0,00%	526.494	58.751.955	79,72943	-	2,22%	1.304.187
2013-10	30	0,00%	526.494	59.278.449	79,52247	-	2,17%	1.288.145
2013-11	30	0,00%	526.494	59.804.943	79,35051	-	2,17%	1.299.586
2013-12	30	0,00%	1.052.988	60.857.930	79,55965	-	2,17%	1.322.468
2014-01	30	1,94%	536.708	61.394.638	79,94651	-	2,15%	1.322.282
2014-02	30	0,00%	536.708	61.931.346	80,45078	-	2,15%	1.333.841
2014-03	30	0,00%	536.708	62.468.054	80,76791	-	2,15%	1.345.400
2014-04	30	0,00%	536.708	63.004.761	81,13760	-	2,15%	1.355.742
2014-05	30	0,00%	536.708	63.541.469	81,53011	-	2,15%	1.367.291
2014-06	30	0,00%	1.073.416	64.614.885	81,60609	-	2,15%	1.390.389
2014-07	30	0,00%	536.708	65.151.592	81,72956	-	2,12%	1.383.018
2014-08	30	0,00%	536.708	65.688.300	81,89560	-	2,12%	1.394.411
2014-09	30	0,00%	536.708	66.225.008	82,00686	-	2,12%	1.405.804
2014-10	30	0,00%	536.708	66.761.716	82,14200	-	2,11%	1.406.830
2014-11	30	0,00%	536.708	67.298.423	82,25026	-	2,11%	1.418.139
2014-12	30	0,00%	1.073.416	68.371.839	82,46969	-	2,11%	1.440.759
2015-01	30	3,66%	556.351	68.928.190	83,00103	-	2,11%	1.455.160
2015-02	30	0,00%	556.351	69.484.541	83,95522	-	2,11%	1.466.905
2015-03	30	0,00%	556.351	70.040.893	84,44705	-	2,11%	1.478.651
2015-04	30	0,00%	556.351	70.597.244	84,90061	-	2,13%	1.501.354
2015-05	30	0,00%	556.351	71.153.595	85,12395	-	2,13%	1.513.186
2015-06	30	0,00%	1.112.703	72.266.298	85,21331	-	2,13%	1.536.849
2015-07	30	0,00%	556.351	72.822.649	85,37116	-	2,12%	1.540.676



2015-08	30	0,00%	556.351	73.379.000	85,78096	-	2,12%	1.552.447
2015-09	30	0,00%	556.351	73.935.352	86,39478	-	2,12%	1.564.217
2015-10	30	0,00%	556.351	74.491.703	86,98408	-	2,12%	1.581.287
2015-11	30	0,00%	556.351	75.048.054	87,50860	-	2,12%	1.593.097
2015-12	30	0,00%	1.112.703	76.160.757	88,05213	-	2,12%	1.616.717
2016-01	30	6,77%	594.016	76.754.773	89,18854	-	2,16%	1.655.076
2016-02	30	0,00%	594.016	77.348.789	90,32981	-	2,16%	1.667.885
2016-03	30	0,00%	594.016	77.942.805	91,18224	-	2,16%	1.680.694
2016-04	30	0,00%	594.016	78.536.822	91,63459	-	2,24%	1.758.413
2016-05	30	0,00%	594.016	79.130.838	92,10174	-	2,24%	1.771.713
2016-06	30	0,00%	1.188.032	80.318.870	92,54352	-	2,24%	1.798.312
2016-07	30	0,00%	594.016	80.912.887	93,02473	-	2,32%	1.873.232
2016-08	30	0,00%	594.016	81.506.903	92,72713	-	2,32%	1.886.984
2016-09	30	0,00%	594.016	82.100.919	92,67814	-	2,32%	1.900.736
2016-10	30	0,00%	594.016	82.694.935	92,62263	-	2,38%	1.965.498
2016-11	30	0,00%	594.016	83.288.952	92,72630	-	2,38%	1.979.616
2016-12	30	0,00%	1.188.032	84.476.984	93,11285	-	2,38%	2.007.854
2017-01	30	5,75%	628.172	85.105.156	94,06643	-	2,41%	2.050.483
2017-02	30	0,00%	628.172	85.733.328	95,01250	-	2,41%	2.065.618
2017-03	30	0,00%	628.172	86.361.501	95,45509	-	2,41%	2.080.752
2017-04	30	0,00%	628.172	86.989.673	95,90728	-	2,41%	2.095.344
2017-05	30	0,00%	628.172	87.617.845	96,12338	-	2,41%	2.110.475
2017-06	30	0,00%	1.256.344	88.874.189	96,23358	-	2,41%	2.140.737
2017-07	30	0,00%	628.172	89.502.362	96,18435	-	2,38%	2.126.175
2017-08	30	0,00%	628.172	90.130.534	96,31907	-	2,38%	2.141.097
2017-09	30	0,00%	628.172	90.758.706	96,35786	-	2,33%	2.113.206
2017-10	30	0,00%	628.172	91.386.878	96,37397	-	2,30%	2.099.535
2017-11	30	0,00%	628.172	92.015.050	96,54825	-	2,28%	2.097.055
2017-12	30	0,00%	1.256.344	93.271.395	96,91988	-	2,26%	2.109.099
2018-01	30	4,09%	653.864	93.925.259	97,52763	-	2,25%	2.116.715
2018-02	30	0,00%	653.864	94.579.123	98,21643	-	2,28%	2.160.290
2018-03	30	0,00%	653.864	95.232.988	98,45225	-	2,25%	2.144.974
2018-04	30	0,00%	653.864	95.886.852	98,90690	-	2,23%	2.141.370
2018-05	30	0,00%	653.864	96.540.717	99,15779	-	2,23%	2.152.276
2018-06	30	0,00%	1.307.729	97.848.446	99,31115	-	2,21%	2.166.428
2018-07	30	0,00%	653.864	98.502.310	99,18449	-	2,19%	2.157.568
2018-08	30	0,00%	653.864	99.156.174	99,30326	-	2,18%	2.162.983
2018-09	30	0,00%	653.864	99.810.039	99,46711	-	2,17%	2.165.064
2018-10	30	0,00%	653.864	100.463.903	99,58684	-	2,15%	2.161.791
2018-11	30	0,00%	653.864	101.117.768	99,70354	-	2,14%	2.162.171
2018-12	30	0,00%	1.307.729	102.425.497	100,00000	-	2,13%	2.180.876



2019-01	30	3,18%	674.657	103.100.154	100,59854	-	2,11%	2.171.232
2019-02	30	0,00%	674.657	103.774.811	101,17675	-	2,16%	2.239.718
2019-03	30	0,00%	674.657	104.449.468	101,61572	-	2,13%	2.221.271
2019-04	30	0,00%	674.657	105.124.126	102,11886	-	2,12%	2.230.183
2019-05	30	0,00%	674.657	105.798.783	102,44000	-	2,12%	2.246.548
2019-06	30	0,00%	1.349.315	107.148.098	102,71000	-	2,12%	2.271.043
2019-07	30	0,00%	674.657	107.822.755	102,94000	-	2,12%	2.283.250
2019-08	30	0,00%	674.657	108.497.412	103,03000	-	2,12%	2.301.747
2019-09	30	0,00%	674.657	109.172.070	103,26000	-	2,12%	2.316.059
2019-10	30	0,00%	674.657	109.846.727	103,43000	-	2,10%	2.306.905
2019-11	30	0,00%	674.657	110.521.384	103,54000	-	2,09%	2.313.907
2019-12	30	0,00%	1.349.315	111.870.699	103,80000	-	2,08%	2.329.084
2020-01	30	3,80%	700.294	112.570.993	104,24000	-	2,07%	2.328.295
2020-02	30	0,00%	700.294	113.271.287	104,94000	-	2,10%	2.374.418
2020-03	30	0,00%	700.294	113.971.582	105,53000	-	2,09%	2.377.265
2020-04	30	0,00%	700.294	114.671.876	105,70000	-	2,06%	2.362.789
2020-05	30	0,00%	700.294	115.372.170	105,36000	-	2,01%	2.320.698
2020-06	30	0,00%	1.400.589	116.772.759	104,97000	-	2,00%	2.340.452
2020-07	30	0,00%	700.294	117.473.053	104,97000	-	2,00%	2.354.488
2020-08	30	0,00%	700.294	118.173.347	104,96000	-	2,02%	2.388.649
2020-09	30	0,00%	700.294	118.873.642	105,29000	-	2,03%	2.409.802
2020-10	30	0,00%	700.294	119.573.936	105,23000	-	2,00%	2.393.459
2020-11	30	0,00%	700.294	120.274.230	105,08000	-	1,98%	2.377.455
2020-12	30	0,00%	1.400.589	121.674.819	105,48000	-	1,94%	2.359.414
2021-01	30	1,61%	711.569	122.386.388	105,91000	-	1,93%	2.356.214
2021-02	30	0,00%	711.569	123.097.957	105,91000	-	1,95%	2.396.766
2021-03	30	0,00%	711.569	123.809.526	105,91000	-	0,00%	-
2021-04	9	0,00%	213.471	124.022.997	105,91000	-	0,00%	-





## COMPETENCIA

Es usted competente, Señor Juez, para conocer de la presente demanda, en consideración de la naturaleza del proceso, del domicilio de las partes y de la cuantía.

## PROCEDIMIENTO

A la presente demanda debe dársele el trámite de un Proceso Ordinario de primera instancia, consagrado en el capítulo XIV del Código Procesal de Trabajo.

## ANEXOS

1. Los enunciados en el acápite de pruebas documentales.
2. Documento de poder.
3. Correo electrónico de radicación demanda con copia al demandado.

## DECLARACION DE OBTENCION DE CORREO ELECTRÓNICO

En concordancia con el artículo 6 del Decreto 806 del 2020, y las disposiciones del Código General del Proceso, manifiesto que el correo electrónico de la parte demandada la obtuve de la página oficial del fondo de pensiones y Cesantías Porvenir, en la dirección <https://www.porvenir.com.co/notificaciones-judiciales>.

Dado lo anterior, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento, que al momento de radicar esta demanda, se ha anexado en copia de la misma a la entidad demandada, de lo cual puede dar constancia la oficina de reparto de la ciudad de Buga.

En cuanto al correo electrónico del demandante, me permito informar que ha sido el suministrado por el poderdante.

## NOTIFICACIONES

La demandada, recibe notificaciones al correo electrónico: [notificacionesjudiciales@porvenir.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@porvenir.com.co)

El suscrito apoderado, recibe notificaciones en su despacho o a través de los siguientes correos electrónicos: [hectorbueno@gmail.com](mailto:hectorbueno@gmail.com), a través del número de celular 3156175561.

El demandante, recibe notificaciones al correo electrónico: [franciscorengiforios@gmail.com](mailto:franciscorengiforios@gmail.com), en la dirección física en la carrera 10 número 20-29 de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca,

Del señor Juez,



Atentamente,

**HECTOR ERNESTO BUENO RINCON**

T.P. 149.085 del C.S de la J.

C.C. 9.736.615 de Armenia.



**ALJ ABOGADOS**  
Asesorías Legales y Jurídicas



Hector Bueno Rincon &lt;hectorbueno@gmail.com&gt;

---

**RADICACION DEMANDA ORDINARIA LABORAL - FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS**

---

**Hector Bueno Rincon** <hectorbueno@gmail.com>

9 de abril de 2021, 10:59

Para: franciscorengriforios@gmail.com, notificacionesjudiciales@porvenir.com.co, repartobuga@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cordial saludo:

A través del presente correo nos permitimos radicar demanda laboral.

De igual forma, nos permitimos certificar que, a través del presente correo estamos llevando a cabo la notificación al demandado, tal cual lo exige el Decreto 806 de 2020, razón por la cual se pone en copia el correo electrónico de notificaciones del fondo de pensiones y cesantías PORVENIR S.A. [notificacionesjudiciales@porvenir.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@porvenir.com.co).

Agradeciendo su atención

**HECTOR ERNESTO BUENO RINCÓN**

Abogado

---

**3 adjuntos****1. PODER ESPECIAL - FRANCISCO JAVIER RENGIFO.pdf**

78K

**2. ANEXOS - FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS.pdf**

2243K

**3. DEMANDA LABORAL ORDINARIA - FRANCISCO JAVIER RENGIFO RIOS.pdf**

991K



SUBSANACION DEMANDA RADICADO 2021-00066-00  
Hector Bueno Rincon <hectorbueno@gmail.com>  
Guadalajara de Buga, agosto 24 de 2021

Señor  
JUEZ PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BUGA  
E.S.D.

REFERENCIA: SUBSANACION DEMANDA LABORAL RADICADO 2021-00066  
DEMANDANTE: FRANCISCO JAVIER RENGIFO  
DEMANDADO: AFP PORVENIR S.A.

Por medio del presente correo, haciendo uso del término otorgado en el auto interlocutorio No.750 del 17 de agosto de 2021, notificado el 18 de agosto de 2021, me permito anexar documento de subsanación de demanda, en el cual se incluye los números de teléfono celular de la parte actora como de su apoderado.

Al presente correo, se anexan los siguientes documentos en PDF:

1. Se envía archivo en PDF que contiene el correo electrónico de radicación de demanda, en el cual, se evidencia que, al momento de radicar la demanda se notificó al demandado.
2. Se remite archivo en PDF que contiene el poder otorgado por el demandante al suscrito.
3. Se anexa archivo en PDF que contiene el documento de subsanación de demanda conforme a las solicitudes hechas por parte de su despacho.
4. Se anexa archivo en PDF que contienen los anexos de la demanda.

Atentamente,

HECTOR ERNESTO BUENO RINCÓN  
Apoderado Judicial